

Santiago, seis septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Guillermo Matte Roos, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A., quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 N° 8 del Decreto Ley N° 3.500 y lo señalado en el artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 del Ministerio del Trabajo, deduce reclamo de ilegalidad “en contra de la Resolución N° 44 dictada por la Superintendencia de Pensiones el 17 de enero de 2024, notificada a su representada el 20 de febrero de 2024, la cual ratificó la Resolución N° 223 de fecha 4 de diciembre de 2023, notificada el 5 de diciembre de 2023, por la cual la Superintendencia sancionó a PlanVital con una multa a beneficio fiscal equivalente a UF 3.300 (tres mil trescientas Unidades de Fomento)”, a fin de que esta Corte de Apelaciones, deje sin efecto la sanción aplicada, o, en subsidio, le imponga una menos gravosa.

Funda el recurso exponiendo, en un primer capítulo, consideraciones preliminares. En primer lugar, se refiere a “I. LA FORMULACIÓN DE CARGOS A TRAVÉS DE OFICIO RESERVADO N° 8601”. Explica que la reclamada, a través del Oficio Reservado N° 8601, de fecha 11 de mayo de 2023, formuló ocho cargos en contra de PlanVital por infracciones a distintas normas legales y administrativas, contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980, en el Decreto Ley N° 3500 de 1980; y, en distintas instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones y la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Seguidamente; detallando cada uno de los cargos.

En segundo lugar, se refiere a “II. LOS DESCARGOS FORMULADOS POR AFP PLANVITAL”. Sostiene que el 18 de mayo de 2023, presentó descargos solicitando, en definitiva, que se dejarán sin efectos los cargos formulados; o, en subsidio, la imposición de una sanción lo menos gravosa posible, teniendo en especial consideración las circunstancias consagradas en el artículo 10 del Nuevo Procedimiento de Sanciones, establecido por Resolución Exenta N° 722 de la Superintendencia de Pensiones de 28 de marzo de 2022.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU

Puntualiza que en dicha oportunidad se hizo presente la ilegalidad del Oficio Reservado, además de una serie de antecedentes que sustentaban las peticiones de PlanVital”, que luego enumera: “(a) La errónea acumulación de casos inconexos en un único Oficio Reservado; (b) La errónea elección del régimen de responsabilidad objetiva; (c) Una falta de fundamentación del Oficio Reservado; (d) Infracción al principio constitucional non bis in ídem; (e) Por último, una infracción al principio de confianza legítima”.

Además, sintetiza la argumentación vertida en sus descargos, respecto a cada uno de los casos. Por su parte, se refiere a ciertos alcances en relación al cumplimiento por parte de PlanVital de los deberes impuestos por la Superintendencia en el Oficio Reservado y en su normativa. Luego, agrega que, además, subsidiariamente, alegó la prescripción de la responsabilidad infraccional y, en caso de desestimarse aquella, la aplicación de la sanción menos gravosa posible, teniendo en especial consideración la buena fe y ausencia de culpa y dolo de PlanVital; distintas circunstancias del artículo 10 del Nuevo Procedimiento de Sanciones de la SP.; y que, adicionalmente, invocó el principio de proporcionalidad que debe estar presente y aplicarse en toda la actividad sancionatoria de los órganos del Estado.

En tercer lugar, se refiere a “III. LA RESOLUCIÓN N° 223 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2023”. Detalla que en dicho acto se impuso una multa ascendente a 3.300 UF, según el desglose que adjunta, y que se desestimaron cada uno de sus argumentos, concluyendo la reclamada que los cargos formulados se encuentran debidamente acreditados, no habiéndolos desvirtuado la Administradora mediante sus descargos y alegaciones, lo que demostraría la falta de cuidado y diligencia por parte de la Administradora, respecto de cada una de las conductas que se le imputaron.

Al respecto, considera que la SP omite en su razonamiento el que no hubo afectación alguna -por el actuar culposo ni doloso de PlanVital- ni del sistema general de pensiones ni en los montos de las pensiones o ahorros de los afiliados o pensionados, ni tampoco a terceros, por lo que la imposición de una multa de más de cien millones de pesos carece de fundamento y



motivación, deviniendo en arbitraria. A su vez, acusa que para la determinación de la sanción y la cuantía tuvo en especial consideración -sin explicar cómo las ponderó- las siguientes circunstancias: la gravedad de la infracción; el beneficio económico obtenido; el daño producido y el riesgo al correcto funcionamiento del sistema de pensiones y a la fe pública; el grado de participación del infractor; la capacidad económica de la AFP; la reparación total y anticipada de los perjuicios causados; la reiteración de la infracción; y, la colaboración durante la investigación.

En cuarto lugar, se refiere a “IV. EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR AFP PLANVITAL”. Señala que dicha impugnación fue interpuesta el día 13 de diciembre de 2023, conforme al artículo 59 de la Ley N° 19.880, solicitando dejar sin efecto la Resolución N° 223, o en subsidio, rebajar sustancialmente la multa impuesta.

Afirma que lo anterior, se basó principalmente en los yerros en que se incurre en la Resolución Impugnada, tales como la errónea aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva; la equivocada acumulación de casos inconexos; la inexistencia de una infracción a la Política de Inversiones de PlanVital; la falta de fundamentación del Acto Impugnado; la falta de gravedad de ciertas infracciones; y, la evidente desproporción en la sanción impuesta.

En quinto lugar, se refiere a “V. LA RESOLUCIÓN N° 44 DE LA SUPERINTENDENCIA”. Indica que, por dicho acto, notificado el 20 de febrero de 2024, la reclamada rechazó el recurso aludido en el acápite anterior, sin mayor fundamentación ni raciocinio, y sólo entregando una visión holística de la situación, desestimó cada uno de los argumentos entregados por su representada, remitiéndose a lo ya señalado en la resolución impugnada, sin analizar detalladamente las defensas oportunamente esgrimidas y desarrolladas por su parte.

Afirma que la SP insiste en la aplicación de un régimen de culpa infraccional; en la vinculación existente entre los distintos cargos formulados; en la infracción a la Política de Inversión y Solución de Conflictos de Interés (“PISCI”) de PlanVital; en la adecuada fundamentación del Oficio



Reservado; en el respeto al principio de proporcionalidad constitucional; y, en definitiva, a la procedencia de la sanción aplicada.

Añade que ni aun someramente, se hace cargo de los argumentos fácticos y jurídicos desarrollados tanto en sus descargos como en la reposición administrativa. De ese modo, la Resolución N° 44 se limita a remitirse, en gran medida, a lo ya expuesto en el Acto Impugnado, sin ahondar en entregar verdaderos fundamentos para rechazar la reposición interpuesta.

En un segundo capítulo, se refiere a “LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”.

En primer lugar, se refiere a “I. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA SP”. Reitera que el reclamo se interpone en contra de la Resolución N° 44 ya aludida, y seguidamente expresa que como todo acto administrativo emanado de un órgano de la Administración del Estado, es esperable que en todo el proceso sancionatorio existiese una coherencia argumentativa y una debida fundamentación de la sanción que se impone, en miras con ello de dar cumplimiento a los principios que rigen en el ordenamiento jurídico, en especial, los de congruencia y fundamentación.

Sostiene que durante el proceso sancionatorio, esa coherencia argumentativa no se verificó, existiendo una evidente contradicción y adecuación de la SP entre la línea argumentativa iniciada en el Oficio de Formulación de Cargos, posteriormente en la Resolución N°223 de fecha 4 de diciembre de 2023, que le impone la multa y, la Resolución N°44, en virtud de la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior. Luego se refiere al principio de fundamentación y su relación con el principio de legalidad, y estos a su vez con las garantías que la Constitución Política de la República asegura en su artículo 19 N°3 inciso segundo y N° 3. Además, hace referencia a lo previsto en los artículos 11 inciso segundo; 40 inciso final; y, 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880. A su vez sostiene que lo reseñado se conecta con los principios de transparencia y publicidad.



Posteriormente, se refiere “A. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DEL OFICIO RESERVADO”, y bajo el título “B. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA”, expone consideraciones que se refieren a la Resolución N° 223.

A su vez, bajo el título “C. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 44”, expresa que la Resolución N° 44, que rechaza la reposición interpuesta por PlanVital carece de la debida fundamentación, pues reitera los vicios de la Resolución N°223, haciendo una breve referencia de las defensas esgrimidas por PlanVital, sin hacerse cargo verdaderamente de todas y cada una de ellas, y menos justifica, razona ni esgrime las motivaciones y fundamentos que ameritan mantener una sanción del todo desproporcionada y carente de fundamentación, deviniendo la misma en arbitraria e ilegal.

Añade que -como señaló- respecto de varias de sus alegaciones la Superintendencia sólo se remite a la resolución impugnada, sin ahondar en los nuevos argumentos expuestos por su parte. A modo de ejemplo, señala que al momento de resolver sus defensas relativas al caso N°4 o su alegación de falta de fundamentación del acto impugnado, en la Resolución N°44 no se desarrolla ninguno de los nuevos argumentos y tampoco se esgrimieron los antecedentes jurídicos, la fundamentación ni la motivación que justifique el rechazo de las alegaciones.

Continúa el segundo capítulo, con el título “II. NO SE CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD INFRACCIONAL DE PLANVITAL”, bajo el cual expresa que la Resolución Impugnada y la Resolución N°44 que rechaza el recurso de reposición interpuesto, insisten en que, respecto de los hechos fiscalizados, es aplicable la asimilación del principio de culpabilidad a la noción de culpa infraccional, conforme a lo cual, basta con acreditar la contravención a una o más normas, sin que sea necesario probar culpa o dolo del sujeto infractor y que PlanVital no acompañó antecedentes que desvirtuarán las supuestas infracciones a la normativa de pensiones, por lo que correspondía aplicar la sanción señalada.



Seguidamente, se refiere a la doctrina y jurisprudencia que afirma que resultan aplicables al derecho administrativo sancionador los principios de derecho penal, apuntando al principio de culpabilidad. Sobre el particular, postula las siguientes consecuencias: (a) La responsabilidad derivada de una infracción administrativa no es objetiva, pues exige la reprochabilidad de la conducta del sujeto. (b) La culpabilidad determina la magnitud de la sanción. (c) Permite formular un reproche a la conducta del autor, por ende, la responsabilidad administrativa es personal. (d) Son contrarias a este principio las infracciones administrativas calificadas por el resultado, es decir, determinar la gravedad de la infracción por las consecuencias que la conducta haya provocado, haya sido previsible o no.

Al respecto, acusa que cada una de las aristas de este principio han sido vulneradas por el ente fiscalizar quien, fundándose principalmente en los cargos contenidos en el Oficio Reservado, dio por acreditado este importante requisito de la culpabilidad basado en un régimen de responsabilidad objetiva. A su vez, cita jurisprudencia y doctrina relativa a la aplicación del principio de presunción de inocencia vinculado a la materia, y expresa que la Superintendencia para salvar la acreditación de la culpabilidad del infractor, asimila dicho principio al concepto de culpa infraccional y, basándose en nulos fundamentos y antecedentes, concluye que dicho requisito se encuentra debidamente acreditado.

Añade que la reclamada no ha acreditado el incumplimiento normativo y los perjuicios causados, pues su parte logró desvirtuar los cargos formulados o, a lo menos, otorgar antecedentes para la aplicación de una sanción menos gravosa.

Prosigue, bajo el título “A. EN CUANTO A LA PRUEBA DE LA INFRACCIÓN”, expresando que la Superintendencia no aportó mayores antecedentes que sustentaran sus cargos y, que contrariamente a ello, dio vacías razones para desestimar sus defensas. Indica que los documentos aportados y las declaraciones de los testigos permitieron acreditar, no sólo la configuración de las infracciones, sino que, además las múltiples conductas adoptadas por PlanVital conducentes a dar aplicación a todas las observaciones efectuadas por la Superintendencia. Adicionalmente, se



acreditó el nulo beneficio económico obtenido por su parte a raíz de los hechos denunciados y la inexistencia de perjuicios para todos los afiliados a PlanVital.

A su vez, bajo el título “B. EN CUANTO A LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS”, consigna que la Superintendencia no ha acreditado perjuicio alguno que legitime la imposición de la multa; y reconoce expresamente que no los ha habido para los fondos, ni para los afiliados y pensionados ni para terceros. Indica que respecto de cada una de las observaciones que la reclamada realizó a PlanVital a través de sus Oficios Ordinarios, fueron oportunamente contestadas y subsanadas, sin que se pusiera en peligro efectivo el funcionamiento del sistema de pensiones.

En consecuencia, considera que un estándar mínimo probatorio en la materia, llevaría a exigir a la Superintendencia, la acreditación de sus afirmaciones, demostrando cómo efectivamente se puso en peligro la confianza del sistema, lo que demostraría la ilegalidad de la Resolución Impugnada.

A su vez, bajo el título “C. EN CUANTO A LA CAUSALIDAD” hace presente la falta de verificación de este requisito, toda vez que no se ha acreditado por la Superintendencia ni la efectiva ocurrencia de las infracciones, ni mucho menos la lesión a bienes jurídicos supraindividuales. A falta de ambos, es imposible que concurra el requisito de causalidad entre la infracción administrativa y el resultado ocasionado.

En otro orden de ideas, bajo el acápite “III. LA ERRÓNEA ACUMULACIÓN DE CASOS INCONEXOS”, alega que la reclamada ha obviado que la facultad de los órganos de la Administración del Estado para acumular o desacumular procedimientos se encuentra legalmente consagrada en el inciso primero del artículo 33 de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, mientras que en la fase administrativa, su parte hizo presente la severa inconsistencia en la que se ha incurrido en este procedimiento sancionatorio, puesto que todos los incumplimientos que se imputan a PlanVital no se originan en los mismos hechos, son totalmente inconexos, todos ocurrieron en fechas diferentes y,



además, no guardan relación alguna entre sí, salvo involucrar a las mismas partes. De tal suerte, resultaría ilegal el acto administrativo de formulación de cargos y consecuentemente, la de todo el procedimiento administrativo. No obstante, reconoce que esta defensa fue desestimada en la Resolución N° 233 y en aquella reclamada en esta sede.

En síntesis, considera que de este modo se infringe el mandato legal que impone el artículo 33 de la Ley N° 19.880.

Seguidamente, se refiere a la “IMPROCEDENCIA DE LOS CARGOS FORMULADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES”, acápite en el que expone las consideraciones relativas a cada uno de los cargos, que habrían sido desatendidas por la reclamada en la fase administrativa.

Continúa con el capítulo “LA SANCIÓN IMPUESTA ES TOTALMENTE DESPROPORCIONADA”. Expresa que, en caso que se estime que PlanVital ha incurrido en las infracciones que se imputan, desechando los argumentos previamente expuestos, de todos modos, la sanción de multa ascendente a UF 3.300 es del todo desproporcionada. Sostiene que la reclamada, para rechazar el recurso de reposición interpuesto, señala que la determinación de la multa y su monto se trata de una atribución de dicho organismo, la cual debe ponderarse según las circunstancias de cada caso en particular y, que resulte proporcional atendida la naturaleza de cada infracción. Asimismo, señaló que la sanción impuesta se hizo utilizando criterios objetivos –aquellos regulados en la Resolución Exenta N° 22 del año 2022–, los que fueron debidamente aplicados por el ente fiscalizador, por lo que no correspondía aplicar una sanción menos gravosa.

En el petitorio solicita “que se deje sin efecto la Resolución N° 223 de fecha 4 de diciembre de 2023, que aplicó la sanción de multa en contra de AFP PlanVital por la suma ascendente a UF 3.300; y, que en su mérito, se desestimen los cargos formulados; o, en subsidio, se rebaje la sanción a la pena de censura o bien, a la mínima multa que se estime conforme a derecho y al mérito del proceso.



Segundo: Que informa, don Luis Felipe Bopp Espinoza, abogado, en representación de la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del reclamo, con costas.

Como cuestión previa, señala que A.F.P. PlanVital S.A. no manifiesta discrepancias respecto de la ocurrencia de los hechos, la naturaleza de las infracciones y la normativa aplicable contenida en la Resolución Sancionatoria en contra de la que recurre, versando su recurso solo en la apreciación por parte de la Superintendencia de algunos antecedentes, especialmente respecto de los elementos dispuestos para la determinación del monto específico de la multa impuesta.

Al respecto, indica que la Resolución sancionatoria cuestionada, contiene la ponderación de todos los criterios orientadores para la fijación de la sanción de multa, atendida la naturaleza de las infracciones verificadas, habiéndose considerado para tales efectos cada una de las circunstancias que invoca la recurrente, para la determinación de la cuantía de la sanción en cuestión.

Destaca que la reclamante señala en su libelo que recurre contra la Resolución N°44, de 17 de enero de 2024; sin embargo, en su petitorio solicita dejar sin efecto la Resolución N° 223, de 4 de diciembre de 2023, de esa Superintendencia. En tal sentido, señala que no existe congruencia ni claridad respecto a la resolución en contra de la cual se interpone el reclamo de ilegalidad, cuestión del todo relevante, porque incide en el cuerpo y motivación de todo el escrito presentado por dicha entidad y que, afecta la posibilidad de entender el libelo y, por consiguiente, la garantía de defensa jurídica del órgano.

Previa exposición de los antecedentes del procedimiento administrativo, señala que, sobre la base de la investigación desarrollada por la Superintendencia, mediante Oficio Reservado N° 8.601, de 11 de mayo de 2023, informó a A.F.P. PlanVital S.A. la apertura de un expediente de investigación en su contra, que rola con el N° 03-C-2023, formulándole los siguientes cargos:

N°1: No cumplir con la obligación establecida en el Libro V, Título X, Capítulo II. Normas para confeccionar los Informes Estadísticos,



Número 1. Instrucciones generales, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en relación con lo dispuesto en Libro V, Título X, Capítulo I, Número 3. Instrucciones Específicas para el Informe Estadístico Trimestral, punto 3.33, letra a) numeral ii, del mismo Compendio; ya que, en cumplimiento de su deber de transmitir trimestralmente el informe estadístico de afiliados y cotizantes del Sistema de Pensiones, correspondiente a los meses de junio 2018, septiembre 2018, diciembre 2018 y marzo de 2019, reportó información inconsistente sobre el número de afiliados cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, inconsistencia que generó un aumento del 111,7% de dichos afiliados, en comparación a marzo de 2018, equivalente a 895.130 en términos absolutos, lo cual afectó la información estadística publicada por esta Superintendencia de Pensiones, afectando la confianza pública respecto al Sistema de Pensiones, en cuanto a la veracidad de la información que se pone a disposición de los usuarios de este.

Nº2: Infringir la regulación sobre confección y envío de los Informes Diarios e Informes TER y Clasificación que deben remitir las Administradoras de Fondos de Pensiones, contraviniendo lo establecido en el Libro IV, Título VIII, Capítulo III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia y en el Libro IV, Título II, Letra C, número 6, letras f) y g), del mismo Compendio, en relación con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 45 bis del D.L. Nº3.500, de 1980; al enviar a esta Superintendencia información inconsistente o extemporánea, en los siguientes casos: i) el informe TER y Clasificación de Instrumentos Extranjeros, de 30 de septiembre de 2019, con error en el nombre del Holding para el fondo mutuo extranjero “Invesco QQQ Trust Series 1”; ii) reenviar el informe de comisiones efectivamente pagadas correspondiente al cuarto trimestre de 2018, dado que el informe original contenía errores sobre la tasa de rebates vigente para el periodo correspondiente; iii) Remitir el Informe diario, correspondiente al 05 de junio de 2019, con errores, al informar la compra de ETFASPDERS&P 500 ETF TRUST de nemotécnico US78462Fl030 para los Fondos de Pensiones Tipo B y E, siendo que recibió el ETFA ISHARES TRUST ISHARES CORE S&P 500 ETF de



nemotécnico US4642872000 y; iv) no enviar el informe diario correspondiente al 07 de junio de 2019. Todo lo anterior va en directo desmedro del correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones, toda vez que la entrega de información inconsistente o extemporánea afecta o entorpece las labores de fiscalización de esta Superintendencia de Pensiones.

Nº3: Infringir lo establecido en el Libro IV, Título X, Letra A, Capítulo V, Sección V.2, número 4 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, toda vez que habría remitido a este Órgano Fiscalizador, al cierre del mes de marzo de 2020, el archivo de Persona Relacionada (archivo RI) sin estar debidamente revisado, ya que la sociedad Gestión y Administración de Edificios y Condominios Limitada, estaba siendo informada con el RUT incorrecto, el cuál fue modificado recién a partir de la siguiente transmisión, esto es, agosto de 2020.

Nº4: No cumplir con la obligación establecida en el Libro IV, Título IV, Letra C, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 45 bis inciso final del D.L. Nº3.500, de 1980, puesto que no habría publicado en su sitio web las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones, la inversión en cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos de inversión de capital extranjero títulos representativos de índices financieros y por la utilización de entidades mandatarias, correspondientes al primer trimestre de 2020, cuyo plazo máximo de publicación era el 7 de septiembre de 2020 (los primeros 5 días hábiles del mes, para el trimestre que corresponda informar).

Nº5: Infringir la regulación sobre acreditación de ausencia de inhabilidades y condiciones de autonomía requerida para los candidatos a director en las Administradoras de Fondos de Pensiones, contraviniendo lo establecido en el Libro IV, Título IX, Letra C, Capítulo IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, en relación a lo instruido a la Administradora mediante Oficio Ordinario Nº12.182, de 23 de mayo de 2016, puesto que en sesión de directorio de 17 de diciembre de 2020, se acordó designar como director a don Federico Morosi, en reemplazo de la renunciada directora Sra. Sara Bendel Manríquez, no



remitiendo a esta Superintendencia de Pensiones el informe con las gestiones realizadas para verificar la ausencia de inhabilidades del director ni copia de su declaración jurada y curriculum.

Nº6: Infringir la regulación sobre prevención, gestión y superación de situaciones con conflicto de interés, contraviniendo lo establecido en el Libro IV, Título I, Letra B, Capítulo III, número 2), letra b), que regula el contenido mínimo de la Política de Inversión y Conflictos de interés; en el Libro IV, Título II, Letra C, Control Interno, número 6 letra j), todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, en relación a lo establecido en el Título II: Políticas de Solución de Conflictos de interés de A.F.P. PlanVital S.A., apartado IV, Tratamiento de Conflictos de interés con custodio Extranjero, de la Política de Inversión y de Conflictos de Interés de A.F.P. PlanVital S.A., ya que a partir del 9 de marzo de 2021 y hasta finales de ese mismo año, habría operado exclusivamente con su Banco Custodio, sin realizar las cotizaciones adicionales exigidas en su PISCI y sin encontrarse en algunos de los supuestos que su propia Política autoriza para realizar ese tipo de operaciones.

Nº7: No cumplir con la obligación establecida en el Libro IV, Título X, Letra A, Capítulo X del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia de Pensiones, en relación a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 147 del D.L. Nº3.500, de 1980, puesto que se detectó que en operaciones de títulos representativos de índices financiero, correspondiente al ETF DBX ETF TRUST DB X TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A SHARES FUND, del día 10 de mayo de 2021, el registro previo (16:19 hrs) fue hecho en forma posterior a la ejecución de la operación (15:17 hrs). La misma situación se constató para las operaciones del mismo instrumento de los días 11 de mayo de 2021 (ejecución a las 14:05 hrs y registro previo a las 14:40 hrs) y 14 de mayo de 2021 (ejecución a las 15:25 hrs y registro previo a las 16:36 hrs).

Nº8: Infringir la regulación sobre traspaso de activos entre Fondos de Pensiones respecto de operaciones de fondo mutuo extranjero, contraviniendo lo establecido en el Libro IV, Título I, Letra B, Capítulo III,



numero 2), letra j), que regula el contenido mínimo de la Política de Inversión y Conflictos de interés; en el Libro IV, Título II, Letra B. Condiciones para la Inversión en el Extranjero, Capítulo II. Adquisición y Enajenación de Instrumentos y Realización de operaciones, número 1, todos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, en relación a lo señalado en el Título II: Políticas de Solución de Conflictos de Interés de A.F.P. PlanVital S.A.”, apartado V, Traspaso de Activos y Asignación de Activos entre Fondos de Pensiones de la Política de Inversión y de Conflictos de Interés de A.F.P. PlanVital S.A., puesto que el 2 de marzo de 2022, habría realizado una transacción de compra y otra de venta para los Fondos de Pensiones Tipo A y C de 290,5 cuotas (US\$325.000) del tipo de instrumento CMEV de Credicorp Capital Asset Management Fund Credicorp Capital Latin American Equity Fund de nemotécnico LU1863154644, sin que hubiera intercambio de dinero o pago.

Señala que finalmente aplicó, mediante la Resolución N° 223, de 4 de diciembre de 2023, una multa de UF 3.300 (tres mil trescientas unidades de fomento) a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., conforme al siguiente desglose: Cargo N°1: UF 600 (seiscientas unidades de fomento) Cargo N°2: UF 400 (cuatrocientas unidades de fomento) Cargo N°3: UF 100 (cien unidades de fomento) Cargo N°4: UF 600 (seiscientas unidades de fomento) Cargo N°5: UF 100 (cien unidades de fomento) Cargo N°6: UF 500 (quinientas unidades de fomento) Cargo N°7: UF 500 (quinientas unidades de fomento) Cargo N°8: UF 500 (quinientas unidades de fomento)

Luego, mediante Resolución N°44, de 17 de enero de 2024, confirmó la multa cursada por medio de la Resolución N°223, de 4 de diciembre de 2023, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Administradora en contra de la citada Resolución.

En primer lugar, se refiere a las supuestas ilegalidades cometidas en la Resolución N°223/2023. Indica que, dado que el reclamo no es claro en cuanto si recurre contra la resolución 223/2023 o la resolución 44/2024, la defensa se refiere a ambos actos administrativos.



Explica que tanto, el Oficio Reservado N°8.601, de 2023, como la Resolución N°233, de 2023, contienen una descripción clara y completa de los hechos y de las normas infringidas, que dieron lugar a los cargos formulados a la recurrente y la posterior sanción aplicada, por lo que el reclamo formulado por la actora, no se condice con los antecedentes que constan en autos.

En relación con el reclamo de la recurrente, relativo a la falta de entrega de información sobre los plazos para ejercer sus derechos, recuerda que en el Capítulo VI del Oficio de Cargos, se comunicó a la Administradora que contaba con “un plazo de diez días hábiles, contado desde el día hábil siguiente al de la notificación del presente Oficio, para presentar sus descargos, por escrito, ante este Servicio, entendiéndose para estos efectos como día inhábil el sábado. En sus descargos deberá acompañar toda la documentación y antecedentes que respalden y acrediten sus dichos, como también, señalar cuáles son los medios de prueba que utilizará para acreditar sus alegaciones, incluyendo la lista de testigos, en el caso que quiera rendir prueba.”

Luego, A.F.P. PlanVital S.A. reclama su desconocimiento de las normas del “Nuevo Procedimiento de Sanciones” que rigen desde 2022, y que constan en la Resolución N° 722, señalando que no habría sido descrito en el Oficio de Cargos. Respecto de este punto, expresa que la Superintendencia mediante Oficio N° 8.372, de 6 de mayo de 2022, remitió a todas las A.F.P. la señalada Resolución. En este contexto, resulta poco comprensible que esa Administradora alegue desconocimiento de dicha norma, especialmente considerando que en el documento que adjuntó a la carta N° GG.0878, de 1° de junio de 2023 mediante la cual presentó sus descargos, hizo múltiples referencias a dicha Resolución, lo que evidencia su claro conocimiento de su contenido.

Por otra parte, sostiene que tanto los cargos formulados como la Resolución sancionatoria, describen detalladamente las normas infringidas y cómo tuvo lugar su incumplimiento, no siendo pertinente detallar la normativa procedimental de los procesos sancionatorios de la



Superintendencia, normativa que, como se ha mencionado, es de pleno conocimiento de la Administradora.

A continuación, y respecto de la falta de fundamentación, que la recurrente acusa en la Letra B. del Título I., Capítulo segundo de su recurso de reclamación, señala que no es comprensible la insistencia de A.F.P. PlanVital S.A., en cuanto a alegar falta de motivación y fundamento, tanto del Oficio de Cargos, como de la Resolución N° 223, de 2023, por cuanto de la sola lectura de ambos actos administrativos, resulta evidente que ello no es efectivo. En efecto, ambos documentos contienen un acabado análisis de todos los elementos que se consideraron en ambas etapas del proceso. Además, de que la referida Resolución señala las circunstancias y elementos considerados para la asignación de responsabilidad, procurando que la aplicación de la sanción resultara justa y acorde al cumplimiento de los fines que la ley le encomienda a la Superintendencia de Pensiones.

Agrega que como consigna el análisis realizado en la cuestionada Resolución, esta se encuentra debidamente motivada, siendo el resultado de un proceso investigativo ajustado al debido proceso, en el que se analizaron todas las defensas y pruebas de la reclamante y, en la que se explicaron todos los criterios orientadores de la misma, encontrándose así acreditada la falta de cuidado y diligencia por parte de A.F.P. PlanVital S.A. respecto de cada uno de los ocho cargos formulados y sancionados.

Afirma que se ha demostrado que la Superintendencia para la determinación de la cuantía de la sanción contenida en la Resolución N°223, de 2023, utilizó parámetros específicos, los cuales se encuentran regulados en la citada Resolución Exenta N°722, de 2022, y que todos dichos criterios fueron debidamente aplicados en la cuestionada Resolución, más allá que A.F.P. PlanVital S.A., no comparta lo resuelto en esta.

Añade que la Resolución N°44, de 2024, que resolvió la reposición interpuesta en contra de la Resolución N°223, de 2023, no incurre en arbitrariedad, pues se encuentra fundada, no siendo procedente el argumento de la reclamante en orden a que no se hace cargo en los nuevos argumentos, pues esto no es efectivo, ni explica debidamente.



Por otra parte, la Resolución N°44, de 2024, contiene un completo análisis de los argumentos presentados por A.F.P. PlanVital S.A., respecto de los ocho cargos formulados, con una contundente coherencia argumentativa, sin que la Administradora haya aportado nuevos antecedentes que ameritaran desestimar o modificar las sanciones aplicadas por la Resolución N°223, de 2023.

Aclara que la Superintendencia, lejos de haber aplicado un régimen de responsabilidad objetiva, como acusa A.F.P. PlanVital S.A. en su recurso de ilegalidad, se fundó en la aplicación de la culpa infraccional.

En el caso específico de los hechos sancionados en la Resolución objeto del recurso, la Superintendencia aplicó sanciones a A.F.P. PlanVital S.A. por diversas infracciones que evidenciaron debilidad en los controles y procesos mantenidos por la Administradora, resultando innegable que esa entidad cumplió con sus obligaciones. Destaca que las actuaciones descritas debilitan la confianza de los afiliados en el Sistema de Pensiones, pues como señaló, la normativa le exige conductas expresamente detalladas, a efectos de asegurar un correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones, por lo que la Administradora debió adoptar las medidas para que sus controles fuesen reales y efectivos, pues sin duda todas ellas generaron perjuicio al correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones y por ende, a la fe pública sobre el mismo, más allá de que esa Administradora insista en negarlo.

Indica que A.F.P. PlanVital S.A. continuando su alegación de falta de culpa infraccional, en la Letra A. del Título II del Capítulo Segundo de su recurso, se refiere a la prueba de la infracción, indicando que se habrían desechado las pruebas presentadas por esa parte, expresando que se desestimaron sus defensas dando “vacías razones”. Considera extremadamente grave la acusación formulada por la Administradora, destacando que existe una disposición legal explícita que otorga al Servicio la potestad de sancionar el incumplimiento de las instrucciones emitidas en el marco de su competencia.

A su vez, señala que en la Letra B del Título II del Capítulo Segundo de su recurso, la actora insiste en que no se generaron perjuicios y que, por



ende, no se configuraría la culpa infraccional. Al respecto, reitera que la Resolución N°223 de 2023 se base en el régimen de culpa infraccional, sin que la Administradora haya presentado en el proceso antecedentes que den cuenta de la concurrencia de algún hecho que justifique su actuar, por lo que no es atendible la alegación de ilegalidad en tal sentido. Señala que para los ocho cargos formulados, se explicaron las infracciones detectadas y la participación de A.F.P. PlanVital S.A. en cada una de ellas, describiendo como en la mayoría de los casos, esta reconoció los hechos infraccionales, conforme consta en sus propias cartas, sin que haya presentado antecedentes objetivos, que permitieran eximirla de la responsabilidad que le cabe en la falta de cuidado en el cumplimiento de los deberes legales que le asisten, y que dieron lugar a las infracciones sancionadas por la Resolución N°223, de 2023.

Anota que, seguidamente, en la Letra C del Título II del Capítulo Segundo de su recurso, la recurrente alega “(...) falta de causalidad entre la infracción administrativa y el resultado ocasionado”, aseverando que no se acreditó la ocurrencia de las infracciones, siendo que en la mayoría de los casos consta el reconocimiento de los hechos por parte de la misma actora. Luego, en la etapa probatoria, los testigos de la Administradora lejos de negar los presupuestos fácticos infraccionales detallaron medidas adoptadas para evitar su reiteración. Así las cosas, es evidente la causalidad entre las infracciones administrativas y el resultado ocasionado, sin que la Administradora haya acreditado lo contrario para ninguno de los ocho cargos, y menos aún, la falta de legalidad de la Resolución N°223 de 2023.

Luego, consigna que en el Título III del Capítulo Segundo de su recurso, A.F.P. PlanVital S.A. reclama “(...) severa inconsistencia en la que se ha incurrido en este procedimiento sancionatorio, puesto que todos los incumplimientos que se imputan a PlanVital no se originan en los mismos hechos, son totalmente inconexos, todos ocurrieron en fechas diferentes y, además, no guardan relación alguna entre sí, salvo involucrar a las mismas partes”.

Al respecto, señala que los casos sancionados dicen relación con situaciones de distinta data, pero que coinciden en conductas respecto de



aspectos financieras y corporativos que se encuentran tipificadas en las normas que rigen al Sistema de Pensiones. En este contexto, hace presente que por razones de economía procesal, en reiteradas ocasiones, ha optado por incluir en un solo proceso investigativo varias infracciones cuando las conductas coinciden en aspectos financieras y corporativos tipificados en las normas que rigen al Sistema de Pensiones.

Refiere que en todo caso A.F.P. PlanVital S.A., en ningún momento del proceso administrativo solicitó la desacumulación de los hechos, pudiendo hacerlo, precluyendo así su derecho en las etapas procesales respectivas. Por último, enfatiza que la acumulación de casos en un solo proceso sancionatorio, en ningún caso ha afectado el derecho a defensa de la actora, habiéndosele otorgado los plazos máximos que autoriza la Ley N°19.880, y actuado el órgano dentro de sus prerrogativas legales.

A continuación, se refiere al Capítulo Cuarto del recurso, en que se sostiene por la reclamante, que los cargos formulados son improcedentes, reiterando los argumentos presentados en el Capítulo III de su escrito de descargos. Afirma sobre el particular, que su parte no puede más que concluir que la actora yerra al insistir sobre los mismos argumentos, los que se limitan a minimizar las infracciones cometidas y sus efectos en el Sistema de Pensiones. Por otra parte, en la mayoría de los casos, sus descargos se limitaron a describir medidas que adoptaría para evitar la reincidencia de los mismos, demostrando así que había gestiones posibles para mejorar su control interno y, que no había adoptado, lo que quedó en evidencia en la etapa probatoria, en la que las declaraciones de sus testigos refirieron para cada cargo las medidas adoptadas para evitar la reiteración de las infracciones, sin aportar antecedentes que la eximieran de la responsabilidad sobre las mismas.

Por último, hace presente que, en el Capítulo Cuarto del recurso, la Administradora no presentó argumentos que evidenciaran la ilegalidad de la Resolución N° 223 de 2023, limitándose a repetir circunstancias de hecho que no configuran ilegalidad alguna, en circunstancias que el recurso de reclamación de ilegalidad, contemplada en el artículo 94 N°8 del D.L. N°3.500, de 1980, constituye un proceso de revisión de legalidad y no una



nueva instancia administrativa en donde el que resuelve pueda sustituir una decisión privativa de la Administración, como pretende la actora.

Luego, se refiere al Capítulo Quinto, en que se reclama que la sanción impuesta es desproporcionada, detallando que asciende a 3.300 UF, omitiendo que dicho monto responde a un total de ocho infracciones, conforme se describe en la Resolución N°223 de 2023.

Sobre las alegaciones de A.F.P. PlanVital S.A. en relación a una supuesta falta de proporcionalidad, hace presente que las multas impuestas a los ocho cargos formulados y que constan en la Resolución N° 223 de 2023, se encuentran debidamente motivadas, siendo el resultado de un proceso investigativo ajustado al debido proceso, en el que se analizaron todas las defensas y pruebas de la reclamante, y en la que se explicaron todos los criterios orientadores de la misma, encontrándose acreditado que hubo falta de cuidado y diligencia por parte de A.F.P. PlanVital S.A. al generar las infracciones descritas en estos autos.

Por último, estima relevante que para determinar el quantum de la multa aplicada mediante Resolución N°223, de 2023, se consideraron todos los elementos regulados en la Resolución Exenta N°722, de 2022, de la Superintendencia, entre otros: la gravedad de la infracción o incumplimiento, el grado de participación del infractor, beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, todos dichos criterios fueron debidamente aplicados en la Resolución N°223, de 2023, pues más allá que A.F.P. PlanVital S.A., no comparta lo resuelto, su parte actuó con apego a la normativa aplicable.

Tercero: Que el reclamo deducido se asila en el artículo 18 del DFL N° 101 del Ministerio del Trabajo, que en lo pertinente dispone: “Las resoluciones del Superintendente que impongan multas o la disolución de una administradora serán fundadas y se notificarán personalmente a su representante legal por intermedio de quien se desempeñe como Ministro de Fe de la Superintendencia o de un Notario Público.

La Administradora afectada podrá reclamar de la resolución del Superintendente ante la Corte de Apelaciones que corresponda, recurso que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU

deberá interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación referida en el inciso anterior.”

Cuarto: Que tal reclamación corresponde a un recurso de ilegalidad, cuyo objeto es el control jurisdiccional del principio de juridicidad de lo obrado administrativamente, es decir, dice relación con la circunstancia de ajustarse o no la resolución del Superintendente a la normativa aplicable a la materia. Consecuencialmente, sólo autoriza a la Corte para pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto administrativo resolutorio, esto es, el examen de algún vicio que ocasione su nulidad y no sobre cuestiones de mérito, no encontrándose en consecuencia legalmente facultada para revisar aspectos de hecho ni los montos de las sanciones impuestas, salvo en cuanto excedieren de aquellos establecidos en la ley.

Quinto: Que en tal sentido, la Excma. Corte Suprema, se ha referido a la competencia que el reclamo de ilegalidad entrega a la jurisdicción, señalando que “El juez contencioso administrativo no puede hablar más que en nombre del Derecho y, por consiguiente, no puede pretender, en modo alguno, sustituir en todas sus atribuciones a los órganos políticos con ocasión de su control. Si tal hiciere excedería notoriamente sus atribuciones constitucionales (...) Lo que el juez puede y debe hacer es mantener la observancia de la Ley y del Derecho en la actuación de esas instancias políticas. Éstas tienen todas sus atribuciones para ser ejercidas con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y ese ejercicio no puede justificar, por tanto, en ningún caso, una infracción del ordenamiento”. Concluye así que el reclamo de ilegalidad tiene por objeto que esta Corte revise si el actuar de la autoridad administrativa se ajusta o no a lo dispuesto por el legislador al efecto y, en este sentido, solamente constatada una ilegalidad, es posible la adopción de medidas destinadas a ponerle fin. (SCS Rol N° 11.533- 2019, de 21 de octubre de 2019, en el que se cita los autores Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, en su obra “Curso de Derecho Administrativo. Editorial Temis. 2011, pág. 1525).

Tal criterio ha sido reforzado por el máximo tribunal al indicar que “se ha sostenido que en el reclamo de ilegalidad los juzgadores carecen de



facultades para examinar el mérito de la decisión impugnada” (SCS 14.043-2022, de 28 de noviembre de 2022).

Sexto: Que previo a analizar las ilegalidades denunciadas, resulta necesario precisar los siguientes antecedentes:

1.- Mediante Oficio Reservado N°8601, de 11 de mayo de 2023, el Superintendente de Pensiones formuló 8 Cargos a la A.F.P. PLANVITAL S.A., en el cual se describen los hechos que motivan los cargos, la normativa aplicable, el análisis de tales elementos fácticos, los descargos y conclusiones.

2.- Por Carta GG/0878/23, de 1 de junio de 2023, A.F.P. PLANVITAL S.A. presentó sus descargos y defensas, los que en lo sustancial son reiterados en la presente reclamación.

3.- Mediante Resolución N°223, de 4 de diciembre de 2023, el Superintendente de Pensiones aplicó la sanción de multa a beneficio fiscal equivalente a UF 3.300 (tres mil unidades de fomento), como resultado de las siguientes sanciones: a) Cargo N°1: UF 600 (seiscientos unidades de fomento); b) Cargo N°2: UF 400 (cuatrocientas unidades de fomento); c) Cargo N°3: UF 100 (cien unidades de fomento); d) Cargo N°4: UF 600 (seiscientos unidades de fomento); e) Cargo N°5: UF 100 (cien unidades de fomento); f) Cargo N°6: UF 500 (quinientas unidades de fomento); g) Cargo N°7: UF 500 (quinientas unidades de fomento); y h) Cargo N°8: UF 500 (quinientas unidades de fomento).

4.- Mediante presentación de 16 de enero de 2022, AFP PLANVITAL S.A. interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución N°223 antes mencionada, alegando la errónea aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, la equivocada acumulación de casos inconexos, la inexistencia de una infracción a la Política de Inversiones de Plan Vital, la falta de fundamentación del acto impugnado, la falta de gravedad de ciertas infracciones y la desproporción de la sanción impuesta.

5.- Por Resolución N°44, de 17 de enero de 2024, de la Superintendencia de Pensiones, se rechazó la reposición deducida en contra de la Resolución N°223, de 4 de diciembre de 2023 por considerar que no se aportaron antecedentes que ameritaran modificar la sanción aplicada.



Séptimo: Que, en cuanto al marco normativo, cabe tener presente que de conformidad al artículo 94 del Decreto Ley N°3500, corresponderá a la Superintendencia del ramo, además de las atribuciones y obligaciones que esta ley establece, las siguientes funciones generales:(...) 5.- Fiscalizar la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y la composición de la cartera de inversiones. (...) 8. Aplicar sanciones y disponer la revocación de la autorización de existencia de conformidad a la ley, de las Administradoras de Fondos de Pensiones, de sus sociedades filiales y de las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales (...).”

El artículo 45 bis del mismo texto legal, en sus incisos séptimo y final señala: “La Superintendencia establecerá anualmente, a través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo 45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. La referida resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso. ”La Superintendencia informará trimestralmente las comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la Superintendencia mediante norma de carácter general”.

Por su parte el artículo 50 de mismo cuerpo legal dispone que “Las Administradoras deberán contar con políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que administran, las que serán elaboradas por el directorio. Asimismo, deberán contar con una política de solución de



conflictos de interés, la que será aprobada por el directorio de la Administradora. La Administradora deberá remitir copia de la política de solución de conflictos de interés a la Comisión de Usuarios y a la Superintendencia, y asimismo deberá publicarla en su sitio web”.

El artículo 147 estatuye: “Las Administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente al interés de los Fondos y asegurarán que todas las operaciones de adquisición y enajenación de títulos con recursos de los mismos, se realicen con dicho objetivo. Las Administradoras responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren a los Fondos por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Las Administradoras podrán celebrar transacciones, compromisos, convenios judiciales y extrajudiciales, avenimientos, prórrogas y novaciones, con el objeto de evitar perjuicios para los Fondos de Pensiones que administran, derivados del no pago de los instrumentos de deuda adquiridos por éstos. Asimismo, las Administradoras podrán participar con derecho a voz y voto en juntas de acreedores o en cualquier tipo de procedimientos concursales, salvo que el deudor sea persona relacionada a la Administradora respectiva, en cuyo caso ésta sólo podrá participar con derecho a voz. Las Administradoras serán responsables por los perjuicios causados a cualquiera de los Fondos de Pensiones con ocasión del encargo de administración de cartera.

El artículo 150 que dispone “Con el objeto de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este artículo y por el acatamiento de las prohibiciones a que se refiere el artículo 154, la Superintendencia, mediante instrucciones de carácter general, determinará la información que mantendrán las Administradoras y el archivo de registros que llevarán, en relación a las transacciones propias, las que efectúen con sus personas relacionadas y las de los Fondos que administran. Previo a la transacción de un instrumento por parte de una Administradora, ésta estará obligada a registrar si lo hace a nombre propio o por cuenta del Fondo de Pensiones



que corresponda. La información hará fe en contra de los obligados a llevarla”.

Por su parte, el artículo 3 del DFL N°101 (Ministerio del Trabajo y Previsión Social), prescribe: “Corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones: “b) Fiscalizar las actuaciones de las Administradoras en sus aspectos jurídicos, administrativos y financieros, para lo cual, a su vez, podrá examinar y calificar el capital de esas entidades, el Fondo de Pensiones y el valor de las cuotas de éste, la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad, el Encaje, el valor de las comisiones que tengan derecho a cobrar a sus afiliados y los montos de las cotizaciones que éstos deban enterar en ellas, para el financiamiento y configuración de las pensiones que deban concederles; “(...) h) Disponer el examen de los libros, cuentas, archivos, documentos, contabilidad y demás bienes físicos, pertenecientes a los entes fiscalizados.

A su vez, con el objeto de evaluar los riesgos a la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, se define grupo empresarial de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores. La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad con este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en la ley N° 20.255. “(...) n) Instruir investigaciones sumarias en las entidades fiscalizadas, aplicando las sanciones que corresponda, sin perjuicio de la Facultad de formular las ulteriores denuncias y querellas ante la justicia del crimen que corresponda por las eventuales responsabilidades de ese carácter que afectaren a aquéllas o a sus directores, ejecutivos o empleados”.

A su vez, el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones que incurrieran en infracciones a



las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas en otros cuerpos legales o reglamentarios, de una o más de las siguientes sanciones: “(...) 2.- Multa a beneficio fiscal, hasta por un monto no superior a 15.000 unidades de fomento, en su equivalente en moneda nacional o hasta por el 30% del valor total de las operaciones irregulares o de los actos o contratos que hayan sido ejecutados en infracción de ley, de reglamentos o de instrucciones de la Superintendencia, en su caso.”

En relación con lo anterior, el artículo 10 de la Resolución Exenta N°722, de 28 de marzo de 2022, de la Superintendencia de Pensiones, señala: “Circunstancias para la aplicación de la o las sanciones. En la determinación de la o las sanciones a aplicar, la Superintendencia considerará las siguientes circunstancias: a) La gravedad de la infracción o incumplimiento. b) El beneficio económico obtenido con motivo del incumplimiento, en caso que lo hubiese. c) El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento de los sistemas de pensiones y/o del seguro de cesantía, a la fe pública y a los intereses de los perjudicados por el incumplimiento. d) La participación de los infractores en la misma. e) El haber sido sancionado previamente por infracciones a las norma sometidas a su fiscalización. f) La capacidad económica del incumplidor. g) La reparación total y anticipada de los perjuicios que hubiere causado, en el caso que corresponda. h) Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Superintendencia en las mismas circunstancias. i) La colaboración que éste haya prestado a la Superintendencia antes o durante la investigación que determinó la sanción.”

En otro orden, el artículo 47 N°1° de la Ley N°20.255, sobre Reforma de Pensiones, dispone: *“La Superintendencia de Pensiones tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones: 1.- Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, en el decreto con fuerza de*



ley N°101, del mismo año, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en otras normas legales y reglamentarias vigentes. ”

Finalmente, debe mencionarse que el marco regulatorio de la actividad sectorial de que se trata, se compone también con “El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones” que contiene normas y procedimientos estatuidos por la autoridad del Ramo en relación a la materia.

Octavo: Que, conforme a la naturaleza del arbitrio, corresponde a esta Corte analizar si la resolución en contra de la cual se dirige, se ajusta a los hechos inmodificablemente establecidos y se corresponde con el marco legal aplicable.

Al respecto, cabe precisar que si bien la crítica de ilegalidad se extiende en algunos acápites a distintos actos como el Oficio Reservado de Formulación de Cargos, la Resolución N°223, de 4 de diciembre de 2023, que la sanciona directamente y la resolución N°44, de 17 de enero de 2024, que rechazó la reposición deducida en contra de la anterior, esta Corte entiende que la reclamación ataca, en definitiva, la determinación de sanción que le fuere impuesta, dentro del procedimiento sancionatorio de que fue objeto, compuesto de una serie de actos trámites y de etapas, cuya culminación es la decisión de imponerle el pago de una multa por la conducta infractora que se tuvo por establecida.

Los aspectos que se acusan por la reclamante dicen relación básicamente con la falta de fundamentación, la acumulación efectuada y la no configuración de la responsabilidad establecida. Además, se alega afectación al principio de la proporcionalidad, con la sanción aplicada y otras discrepancias con el proceder de la autoridad sectorial.

Noveno: Que, la Resolución 223, de 4 de diciembre de 2013, concluye que el análisis circunstanciado de los antecedentes de hecho descritos en el oficio de cargos y en la misma, al tenor de la normativa legal aplicable en la materia, permiten tener por acreditadas cada una de las conductas que le fueron imputadas a la Administradora, las que dan cuenta de una falta de cuidado y diligencia por su parte, las que detalla:

“a) Incumplir el deber de transmitir trimestralmente el informe estadístico de afiliados y cotizantes del Sistema de Pensiones,



correspondiente a los meses de junio 2018, septiembre 2018, diciembre 2018 y marzo de 2019, toda vez que reportó información inconsistente sobre el número de afiliados cubiertos por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, lo que generó un aumento del 111,7% de dichos afiliados a A.F.P. PlanVital S.A., en comparación al mes de marzo de 2018, equivalente a 895.130 personas en términos absolutos, lo cual afectó la información estadística publicada por esta Superintendencia de Pensiones, deteriorando la confianza pública respecto al Sistema de Pensiones, en cuanto a la veracidad de la información que se pone a disposición del público en general.

b) Infringir la regulación sobre confección y envío de los Informes Diarios e Informes TER y Clasificación que deben remitir diariamente las Administradoras de Fondos de Pensiones a esta Superintendencia, al enviar información inconsistente o extemporánea, en los siguientes casos: i) el informe TER y Clasificación de Instrumentos Extranjeros, de 30 de septiembre de 2019, con error en el nombre del Holding para el fondo mutuo extranjero “Invesco QQQ Trust Series 1”; ii) reenviar el informe de comisiones efectivamente pagadas correspondiente al cuarto trimestre de 2018, dado que el informe original contenía errores sobre la tasa de rebates vigente para el periodo correspondiente; iii) remitir, el Informe Diario correspondiente al 05 de junio de 2019 con errores, al informar la compra de ETFASPDERS&P 500 ETF TRUST de nemotécnico US78462F1030 para los Fondos de Pensiones Tipo B y E, siendo que recibió el ETFA ISHARES TRUST ISHARES CORE S&P 500 ETF de nemotécnico US4642872000; y iv) no enviar el Informe Diario correspondiente al 7 de junio de 2019. Todo lo anterior, en directo desmedro del correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones, ya que la entrega de información inconsistente o extemporánea afecta o entorpece las labores de fiscalización de esta Superintendencia de Pensiones.

c) No cumplir con la obligación de enviar a esta Superintendencia, correctamente, el Informe de Personas Relacionadas, toda vez que al cierre del mes de marzo de 2020, la Administradora remitió el Archivo de Personas Relacionadas (archivo RI), sin estar debidamente revisado, ya que



la sociedad Gestión y Administración de Edificios y Condominios Limitada estaba siendo informada con el RUT incorrecto, el cual fue modificado pero a partir de la siguiente transmisión, esto es, agosto de 2020.

d) No cumplir con la obligación de publicar en su sitio web las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones, por la inversión en cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos de inversión de capital extranjero títulos representativos de índices financieros y por la utilización de entidades mandatarias, correspondientes al primer trimestre de 2020, cuyo plazo máximo de publicación era el 07 de septiembre de 2020 (los primeros 5 días hábiles del mes, para el trimestre que corresponda informar).

e) Infringir la regulación sobre acreditación de ausencia de inhabilidades y condiciones de autonomía requerida para los candidatos a director en las Administradoras de Fondos de Pensiones, toda vez que en la sesión de directorio del 17 de diciembre de 2020, se acordó designar a un director en reemplazo de otro renunciado, no remitiendo a la Superintendencia de Pensiones, dentro de los 15 días siguientes a la designación, el informe con las gestiones realizadas para verificar la ausencia de inhabilidades del director ni copia de su declaración jurada y curriculum.

f) Infringir la regulación sobre prevención, gestión y superación de situaciones con conflicto de interés, conforme a lo establecido en la normativa y en su Política de Inversión y de Solución de Conflictos de Interés, ya que a partir del 09 de marzo de 2021 y hasta finales de ese mismo año, habría operado exclusivamente con su Banco Custodio, sin realizar las cotizaciones adicionales exigidas en su PISCI y sin encontrarse en algunos de los supuestos que su propia Política autorizaba para realizar ese tipo de operaciones.

g) No cumplir con la obligación de registro previo, toda vez que en operaciones de títulos representativos de índices financiero, correspondiente al ETF DBX ETF TRUST DB X TRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A SHARES FUND, del día 10 de mayo de 2021, el registro previo (16:19 hrs.) fue hecho en forma posterior a la ejecución de la operación (15:17 hrs.). La misma situación ocurrió respecto de las operaciones del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU

mismo instrumento para los días 11 de mayo de 2021 (ejecución a las 14:05 hrs. y registro previo a las 14:40 hrs.) y 14 de mayo de 2021 (ejecución a las 15:25 hrs. y registro previo a las 16:36 hrs.)

h) Infringir la regulación sobre traspaso de activos entre Fondos de Pensiones respecto de operaciones de fondo mutuo extranjero, infringiendo la normativa y su Política de Solución de Conflicto de Interés, dado que el 2 de marzo de 2022 habría realizado una transacción de compra y otra de venta para los Fondos de Pensiones Tipo A y C de 290,5 cuotas (US\$325.000) del tipo de instrumento CMEV de Credicorp Capital Basset Management Fund Credicorp Capital latín American Equity Fund de nemotécnico LU1863154644, sin que hubiera intercambio de dinero o pago”.

Concluye que tales conductas infraccionales inciden directamente en el correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones, toda vez que vulneran normas cuya finalidad es controlar que este no presente anomalías, errores o inconsistencias, que puedan afectar los Fondos de Pensiones y, en definitiva, los montos de las pensiones de los afiliados.

Agrega que la Administradora infringió normas que regulan la entrega de información fidedigna y oportuna del Sistema de Pensiones, lo que es relevante para la Superintendencia de Pensiones, puesto que sobre la base de esta se supervigila y fiscaliza que no existan errores o irregularidades sistémicas y, además, es información utilizada por diversos usuarios tanto para adoptar decisiones personales en materia previsional, como para trabajos de estudios o tesis universitarias.

Sostiene, además, A.F.P. PlanVital S.A. infringió normas establecidas para asegurar la correcta administración de los Fondos de Pensiones, como aquellas relacionadas con la obligación de realizar al menos dos cotizaciones de precios para cada operación financiera realizada con el custodio extranjero. Así como también la norma relativa al registro previo, la cual tiene por finalidad que no se favorezca un Fondo en desmedro de otro o, la obligación de que en las operaciones entre Fondos tiene que haber intercambio de dinero. Todas estas normas son en cumplimiento de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU

obligación de la Administradora, de velar por la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos que administra.

Estima así que todas las infracciones detectadas afectan el correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones.

Para efectos de determinar la sanción aplicable en la especie y su cuantía, indica -la resolución- que se han tenido en especial consideración, elementos como la gravedad de la sanción, el beneficio económico obtenido, daño o efectos producidos por las infracciones, grado de participación del infractor, capacidad económica del mismo, reparación, reiteración, sanciones anteriores, colaboración.

De acuerdo a lo anterior, y en cuanto a estas circunstancias, la autoridad sectorial, efectúa las siguientes consideraciones:

a. En cuanto a la gravedad de la infracción o incumplimiento concluye que:

Cargo N° 1: se considera una infracción grave, ya que tiene relación con el incumplimiento de la regulación sobre flujos de información que debe cumplir toda Administradora de Fondos de Pensiones, la cual no solo comprende remitir la información oportunamente, sino que también que la enviada sea fidedigna. Indica que dicha información sirve para que esta Superintendencia supervigile el funcionamiento del Sistema de Pensiones, además de levantar información estadística que es puesta a disposición de la ciudadanía en general, la cual es utilizada para diversos fines, desde estudios para Fundaciones u otros organismos hasta tesis o memorias de grado, sin perjuicio de aquellos ciudadanos que la consideran para tomar decisiones respecto a sus Fondos o Administradora. De modo que si la información que la Superintendencia recibe desde esa Administradora es inconsistente o errónea genera por una parte que, no se pueda ejercer debidamente la supervigilancia del Sistema, pues los antecedentes con los que se trabajan no son acordes a la realidad y, por otra, que la información publicada sea de mala calidad, afectando a las personas que hacen uso de esos insumos para fines particulares, con lo cual se genera una desconfianza en la opinión pública, respecto al Sistema de Pensiones en general, en cuanto a que tan bien cumplen su rol los actores del Sistema. Esta situación, puso de



manifiesto una clara falta de diligencia de A.F.P. PlanVital S.A. en el tratamiento de la información que remitió a la Superintendencia, demostrando la ausencia de controles o controles insuficientes, ya que no se trató de un solo informe, sino que de cuatro, lo que abarcó el período de un año completo (junio 2018, septiembre 2018, diciembre 2018 y marzo 2019). Sin embargo, para efectos de determinar el monto de la sanción a aplicar en este caso, se consideran sólo los dos últimos, atendidos los plazos de prescripción.

Cargo N°2: calificado como infracción moderada. Señala que la Ley N°20.255, introdujo un conjunto de modificaciones en el ámbito de las inversiones de los Fondos de Pensiones, que se orientaron a perfeccionar y flexibilizar la legislación, definiendo ciertas materias que serían reguladas por un texto complementario denominado Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Dicho Régimen, reguló materias específicas de las inversiones de los Fondos de Pensiones que por su naturaleza requerían de mayor flexibilidad y detalle y además, definió límites de inversión cuyo objetivo fue propender a una adecuada diversificación de los Fondos. A causa de lo anterior, se generó un nuevo plan de cuentas en el cual se incorporaron cambios en la información a ser remitida desde las Administradoras a la Superintendencia de Pensiones, en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones, considerando las nuevas alternativas de inversión autorizadas y estructura de límites de inversión; generándose la estructura de los Informes Diarios, la que está compuesta básicamente por un conjunto de datos codificados que deben ser proporcionados a esta Superintendencia, a través de los formularios electrónicos definidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. De esta manera, desde el año 2008 que se deben remitir los Informes Diarios, como están establecidos actualmente, a la Superintendencia, de modo que no es aceptable que transcurrido tanto tiempo desde su implementación, esa Administradora no tenga sistemas o controles que impidan la ocurrencia de las inconsistencias detectadas y que son fundantes del cargo N°2, las que afectan el correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones. Esto por no contar con información correcta y oportuna, lo que redundó en que la



Superintendencia no pueda fiscalizar adecuadamente el correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones y tomar medidas oportunas de remediación frente a situaciones anómalas respecto a la regulación. Expresa que si bien las inconsistencias detectadas no incidieron mayormente en el Sistema de Pensiones, no se trató de un hecho aislado o excepcional, verificándose a lo menos cuatro situaciones de este tipo. Sin embargo, es efectivo que la Administradora comunicó las inconsistencias detectadas a la Superintendencia de Pensiones, lo que da cuenta de que si bien presenta controles, estos no son preventivos, pues no evitan que las situaciones de inconsistencias se materialicen. Dado lo anterior, considera necesario que A.F.P. PlanVital S.A. mejore sus sistemas y controles internos, detecte riesgos o falencias en ellos y establezca medidas para mejorar las situaciones detectadas, a fin de que tenga la capacidad de evitar inconsistencias en la información que transmite.

Cargo N°3: calificado como infracción menor. En este caso se detectó una falta de control por parte de A.F.P. PlanVital S.A., respecto a la calidad de la información que remite a la Superintendencia, la que incide directamente en la fiscalización que dicho Servicio realiza respecto al correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones. Lo anterior, se relaciona con la obligación que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones, en cuanto a remitir a la Superintendencia el archivo RI mediante transmisión electrónica de datos, en forma íntegra y debidamente actualizado y revisado, según la periodicidad establecida en el mismo Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. (Libro IV, Título X, Letra A, Capítulo V, sección V.2., número 4 del Compendio). Así, si bien en el presente caso se trata solo de una inconsistencia que generó la infracción normativa, cabe considerar que A.F.P. PlanVital S.A. tiene la calidad de reincidente, toda vez que el año 2019, por medio de la Resolución N° 26, de 29 de marzo de 2019, fue sancionada con 200 UF, por múltiples inconsistencias en la remisión del Archivo RI, oportunidad en la cual la A.F.P. se comprometió a mejorar sus controles y sistemas, los que no funcionaron, conforme se pudo apreciar en el presente cargo. Reitera que los Archivos RI son antecedentes de suma relevancia para fiscalizar y



controlar las operaciones de las personas que, por su relación, cargo o posición dentro de una A.F.P., tengan acceso a información respecto de las transacciones de los Fondos de Pensiones, a efectos de que no haya un aprovechamiento de aquellos. De esta manera, la remisión de información errónea, puede entorpecer o impedir acciones de fiscalización, toda vez que para fiscalizar que las personas/sociedades consignadas en el referido archivo cumplan con su obligación de informar transacciones de instrumentos susceptibles de ser adquiridos por los Fondos, se requieren todos los antecedentes que permitan individualizar a la persona/sociedad relacionada, dentro de los cuales se encuentra el RUT de la persona natural y/o jurídica, para fines de consultar a las respectivas bolsas de valores.

Cargo N°4: calificado como infracción grave. En este caso, existió falta de control por parte de A.F.P. PlanVital S.A., respecto a la información que obligatoriamente debía publicar en su sitio web. A mayor abundamiento, conforme a lo establecido en el Libro IV, Título IV, Letra C del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esa Superintendencia, la publicación de las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por la inversión en cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos de inversión de capital extranjero, títulos representativos de índices Financieros y por la utilización de entidades mandatarias, debe efectuarse dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio, para los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto, respectivamente. En este caso, A.F.P. PlanVital S.A. tenía plazo hasta el día 7 de septiembre de 2020 (5 primeros días hábiles del mes de septiembre) para efectuar la publicación, lo cual no hizo y si no es por la intervención de esta Superintendencia de Pensiones, la cual por medio de un correo electrónico de 20 de octubre de 2020, advirtió a la Administradora sobre la ausencia de la publicación, la A.F.P. no se hubiera percatado de la situación. De esta manera, recién el 20 de octubre de 2020, la Administradora efectuó la publicación en cuestión. Vale decir, la Administradora no tenía un control sobre lo que estaba publicado en su sitio web, pues al 20 de octubre y por un correo electrónico de esta Superintendencia, detectó que no había publicado la información exigida en



la normativa. Esta situación se ve agravada, toda vez que la señalada A.F.P. tiene la calidad de reincidente, ya que anteriormente, por medio de la Resolución N°88, de 26 de junio de 2019, se le sancionó con una multa de 400 UF, por incumplir su obligación de publicar dentro de plazo, en su sitio web, las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones que administraba. Asimismo, en dicha oportunidad, la A.F.P. comprometió mejoras a sus sistemas, a efectos de que dicha situación no volviese a suceder, las cuales a todas luces, fueron insuficientes. Por último, es menester indicar que no poner a disposición del público los informes de las comisiones pagadas, impide que las personas en general tengan acceso oportuno, correcto y expedito a dicha información, lo que afecta sus derechos a conocer las comisiones de administración en vehículos de inversión que pagan sus Fondos de Pensiones de manera implícita, lo cual eventualmente puede generar un perjuicio al no contar con toda la información para tomar decisiones de cambio de Tipo de Fondo y de Administradora.

Cargo N°5: calificado como infracción moderada. Se indica que se incumple por la Administradora, la exigencia de remitir un informe con las gestiones realizadas para verificar la ausencia de inhabilidades de un director elegido, así como la copia de su declaración jurada y curriculum, lo que tiene por finalidad permitir a esta Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de la normativa, en cuanto a ausencias de las inhabilidades por parte de un director que accede al cargo o asume un nuevo período. Se indica que no contar con la señalada información impide o dificulta a la Superintendencia de Pensiones la fiscalización sobre la materia, la que tiene por finalidad asegurar la mayor transparencia en cuanto al funcionamiento del Sistema de Pensiones, a fin de evitar conflictos de interés, en los cuales se privilegie el particular o de un grupo, en desmedro de los de los Fondos de Pensiones administrados. Se tiene presente que la Superintendencia tiene la facultad de impartir instrucciones de carácter obligatorio a las Administradoras de Fondos de Pensiones, que es lo que se hizo con el Oficio Ordinario N° 12.182, de 23 de mayo de 20216, el cual tuvo por objeto precisar el alcance de la acreditación de ausencia de inhabilidades y condiciones de autonomía, en una situación no explicitada en Compendio



de Normas del Sistema de Pensiones, pero que supletoriamente aplica como mecanismo de ingreso de una persona al Directorio de una Administradora. Así, en caso de discrepancia, la Administradora debió haber solicitado un pronunciamiento del Servicio sobre la materia.

Cargo N°6: calificado como infracción grave. La Administradora, tiene la obligación de velar por la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos que administra y es, en el marco de dicho deber fiduciario, que la Administradora comprometió en su política de Inversión y Solución de Conflictos de Intereses que, en caso de realizar operaciones con su banco custodio o entidades del grupo, realizaría al menos dos cotizaciones de precios para cada operación financiera, ello a fin de buscar el mejor precio para los Fondos en cuestión y no perjudicar los intereses de éstos en beneficio del banco custodio y/o entidades del grupo. De modo que no haber realizado las cotizaciones de precios para operaciones financieras comprometidas en su PISCI, durante un extenso periodo de tiempo y haber operado exclusivamente con su banco custodio, genera un riesgo para los Fondos que administra, pues concentrar operaciones en una determinada entidad sin asegurarse que el precio de las operaciones sea el mejor para los señalados Fondos, finalmente afecta a los afiliados, pues el monto de sus pensiones depende exclusivamente de la cantidad que tengan acumulada al momento de cumplir los requisitos para pensionarse. Indica que la infracción de esta norma es grave, pues afecta directamente al deber fiduciario que expresamente tienen las A.F.P. para con los Fondos de Pensiones que administra, más aún si se considera que la norma en cuestión fue comprometida por la Administradora en su PISCI, es decir, asumió este mecanismo de cotizaciones, a fin de evitar conflictos de intereses entre los Fondos y el banco custodio y/o entidades del grupo al que pertenece.

Cargo N°7: calificado como infracción grave. Se refiere a la obligación de registro previo que se enmarca en el deber fiduciario que tiene la A.F.P. respecto a los Fondos de Pensiones que administra, toda vez que tiene por objetivo el resguardar los intereses de los Fondos de Pensiones y que no sean perjudicados por operaciones arbitrarias de las Administradoras, otorgándoles los mejores precios a un Fondo en desmedro del resto. Así las



Administradoras deben velar por la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad de todos los Fondos de Pensiones sin distinción, esto es, lo que pretende resguardar el adecuado registro previo. De esta manera, al no cumplir adecuadamente con el registro previo, A.F.P. PlanVital S.A. puso en riesgo los Fondos de Pensiones que administra.

Cargo N°8: calificado como infracción grave. Como se indicó anteriormente en la presente Resolución, la norma general es realizar las transacciones en el mercado secundario formal, de manera de resguardar la transparencia de las transacciones y precios, además que aplica la norma de “entrega contra pago”, cuya finalidad es asegurar la titularidad de las inversiones por los Fondos. Por tales razones se limitan los casos de operaciones de libre de entrega entre Fondos, considerando que los Fondos son patrimonios separados. Asimismo, las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden realizar un intercambio de cuotas de fondos mutuos entre los Fondos, lo cual únicamente estaría autorizado si se realiza en el marco de cambio de afiliados de un Fondo a otro. La A.F.P. PlanVital S.A., durante la fiscalización, como en sus descargos y alegaciones presentadas en el presente proceso sancionatorio, no logró explicar el traspaso de un Fondo a otro, sin que hubiera pago de por medio, no velando por el interés propio de cada Fondo de Pensiones involucrado, favoreciendo a uno en desmedro de otro, lo cual va en contra del deber fiduciario que tienen como A.F.P. para con ellos.

b. En cuanto al beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, se considera que no constan antecedentes en autos que den cuenta que la Administradora hubiere obtenido un beneficio económico con respecto a todas las infracciones formuladas en los diversos cargos.

c. En cuanto a los efectos de las infracciones se considera que los hechos que han sido objeto de la presente Resolución producen daño y riesgo al correcto funcionamiento del Sistema de Pensiones y a la fe pública. Se sostiene que parte medular del Sistema de Pensiones, radica en que a las Administradoras de Fondos de Pensiones se les ha concedido la autorización para administrar correctamente los Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el Decreto Ley N°



3.500. Así, dicha Administradora debe velar y garantizar el debido cumplimiento del giro único que le impuso la ley, esto es, la debida administración de los Fondos de Pensiones, debiendo observar la normativa vigente de cumplimiento oportuno de las prestaciones otorgadas en el marco del Sistema de Pensiones, en concordancia con una debida administración de los Fondos, lo cual implica, la obtención de una adecuada seguridad en las inversiones que efectúe con dichos Fondos, así como una adecuada rentabilidad de éstos, manteniendo informada a la Superintendencia de Pensiones de los movimientos que se realicen, a efectos de vigilar que estos se ajusten a la normativa vigente sobre la materia y evitar así, cualquier distorsión o anomalía que finalmente afecte a cada uno de los afiliados del Sistema de Pensiones, en cuanto a los montos de sus fondos acumulados y, en definitiva, el de la pensión que reciban una vez cumplido los requisitos establecidos en la ley para ello, pues como esa Administradora conoce, del total de los fondos que logre acumular un afiliado en su vida laboral activa, dependerá el monto de la pensión a recibir.

d. Respecto del grado de participación concluye que la Administradora participó directamente en los hechos contravencionales como autor de estos, en todos los cargos formulados.

e. En cuanto a la capacidad económica del infractor, A.F.P. PlanVital S.A., se tiene en consideración lo informado en los estados financieros al 30 de septiembre de 2023.

f. En cuanto a la reparación total y anticipada de los perjuicios que hubiere causado, se señala que no se observa alguna acción en tal sentido por parte de A.F.P. PlanVital S.A. respecto a todos los cargos formulados.

g. Se concluye que hay reiteración de la conducta por parte de A.F.P. PlanVital S.A., respecto de los cargos N°3 y N°4. En cuanto al cargo N°3, mediante Resolución N° 26, de 29 de marzo de 2019, fue sancionada por la Superintendencia de Pensiones por remitir archivo RI con errores, y mediante Resolución N°88, de 26 de junio de 2019, por no publicar dentro de plazo las comisiones.



h. Se consideran e indican sanciones aplicadas anteriormente por la Superintendencia en las mismas circunstancias a otros partícipes del Sistema de Pensiones.

i. En relación con colaboración del infractor se determinó que A.F.P. PlanVital S.A. no prestó colaboración durante la investigación.

Décimo: Que, por su parte, la Resolución N°44, de 17 de enero de 2024, dictada por el Superintendente (S) de Pensiones, se pronuncia sobre la reposición deducida por la Administradora en contra de aquella que aplicó la sanción de multa.

En primer lugar, se refiere a las alegaciones formuladas en el referido recurso en relación al régimen de responsabilidad aplicado, señalando que tal como se indicó en la Resolución N°223, el régimen aplicado, ha sido el de responsabilidad infraccional, estatuto bajo el cual la prueba del elemento subjetivo, ya sea culpa o dolo, no consiste en la verificación de un suceso o estado psíquico del agente, sino que se trata de un ejercicio de imputación, de carácter normativo, que se satisface con verificar si el formulado de cargos observó o no la conducta exigida en la norma.

A continuación se refiere a la errónea acumulación que habría tenido lugar, señalando al respecto que los hechos por los cuales se efectúa la imputación de cargos y luego se aplica la sanción correspondiente, se encuentran vinculados entre sí, pues dicen relación con materia de carácter financiero y la obligación de la A.F.P. de cumplir con las medidas de control, respetar prohibiciones e informar adecuadamente, en tiempo y forma a la Superintendencia. Hace presente que la recurrente no aporta antecedentes, al respecto y que en todo caso la misma tuvo los plazos para formular sus descargos y defensas, aportar prueba y hacer observaciones de la rendida.

Luego, se hace cargo del cuestionamiento del cargo N°6 que formula la recurrente, indicando que conforme a la tabla que realiza, las operaciones realizadas por la Administradora con su Banco Custodio, entre marzo de 2021 y finales de ese año, sin realizar cotizaciones adicionales, habrían sido la generalidad de las operaciones FX y no una excepción como esta lo alega. De modo que las excepciones definidas por la Administradora en su



PISCI, son para mitigar el riesgo de situaciones excepcionales a la operatoria normal frente a una situación estructural, tal como lo ocurrido con los problemas de la estructura del equipo de inversiones, el que no daba soporte adecuado a la operatoria, por lo que se debiera entender que se está ante una situación de riesgo sistemática, que no está considerada en la política de la A.F.P.

En cuanto a la alegación de no haber sido considerados sus planes de mitigación, tiene presente que la Administradora indicó en su escrito que tales situaciones se debieron a cambios estructurales de la gerencia de inversiones, debiendo elaborar un plan para superar falencias en su modelo de proyección de flujos de caja, aumentar capacidad de contrapartes y, tratar de mitigar el riesgo de entrega, los que son riesgos mayores, teniendo impacto en el perfil de riesgo de los fondos que administra. Así el no haber realizado cotizaciones de precios para operaciones financieras concentrándolas en una sola entidad, esto es, su Banco Custodio, por un extenso período de tiempo, conlleva el riesgo para los afiliados a los Fondos de Pensiones administrados por esa A.F.P. en cuanto a no obtener las mejores condiciones de precios, lo cual no resulta justificable por los motivos estructurales invocados por ésta, incumpliendo disposiciones normativas y de su propia política de inversión, todo lo cual es contrario a su deber fiduciario. Por lo que no se puede considerar como atenuante que después de más de medio año de someter a los fondos de pensiones a los referidos riesgos, recién adoptase medidas para hacer cumplir su PISCI, siendo que su cumplimiento, forma parte de su deber fiduciario.

Respecto de las alegaciones por el cargo N°4, esto es, no publicar en su sitio web oficial las comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones, por las inversiones que allí se describen y a la falta de fundamentación del Oficio de Cargos que sirvió de base a la Resolución N°223, se remite para su desestimación a lo señalado en esta última.

Finalmente, se hace cargo de la desproporcionalidad alegada y la falta de consideración de las circunstancias en la determinación de la multa impuesta, expresando la improcedencia de tales faltas por cuanto la sanción



aplicada habría observado los elementos que se dicen preteridos y se ajusta a los parámetros legales.

Undécimo: Que el primer capítulo de ilegalidad se sustenta en la falta de fundamentación, crítica que la reclamante efectúa tanto del Oficio Reservado de Cargos, de la resolución que la sanciona y de la que rechaza su reposición, alegando falta de coherencia y contradicción argumentativa, con la consiguiente afectación del debido proceso y del principio de legalidad.

En cuanto al Oficio Reservado de cargos, la falta de motivación que se le atribuye es la ausencia de explicación sobre los hechos, incumplimientos e infracciones que ameriten una sanción tan gravosa como la impuesta. Además, se alega que no se le indicaron los derechos que le asistían, plazos y normas legales, en relación a los cargos formulados, ni las sanciones a las que se exponía.

Respecto de la Resolución 223, la reclamante cuestiona los argumentos sobre la base de los cuales rechaza la falta de fundamentación que alegó en sus descargos respecto del Oficio reservado, amparado en la ausencia de norma en el Decreto Ley N°3.500, puesto que deben imperar principios y garantías constitucionales. Aduce también que el ente fiscalizador aunque dice considerar circunstancias como la gravedad de la infracción, del beneficio obtenido, el riesgo del sistema de pensiones y la fe pública, la participación del infractor, su capacidad económica, la reparación de los perjuicios causados y la supuesta reiteración de conductas, no lo hace suficiente y/o debidamente; lo que era relevante para la aplicación de la sanción impuesta. Además, sostiene que resulta arbitrario e ilegal considerar la imposición de otras sanciones aplicadas con anterioridad, cuando no se acreditó que se trate de las mismas circunstancias, como lo requiere la Resolución Exenta N°722 del año 2022, dictada por la propia Superintendencia del Ramo.

Finalmente, en cuanto a la Resolución N°44, que rechazó la reposición en contra de la Resolución N°223, se alega que hace una breve referencia de las defensas que dicha parte esgrimió, sin hacerse cargo de estas, ni



indicar razones que ameritaran la mantención de la sanción impuesta, ni de las nuevas que invocó.

Undécimo: Que, el examen de los antecedentes que han sido reseñados en los motivos que preceden, llevan a descartar la falta de fundamentación, de coherencia y la contradicción que la Administradora alega, respecto de los actos cuestionados. En efecto, en los cargos que se le formularon se describen y analizan los hechos e infracciones de que se estiman constitutivos, existiendo entre estos y la resolución sancionatoria la debida correlación fáctica y normativa, la que se sustenta en los motivos que la autoridad del ramo detalladamente expone en su decisión, los cuales son examinados y reiterados en la determinación que recayó sobre la reposición; resolución que además, se hace cargo de las nuevas alegaciones que se plantearon en dicha sede.

Además, tampoco resulta admisible la crítica de ilegalidad respecto del Oficio de Cargos, por cuanto dicho acto cumple con las exigencias que la reclamante estima incumplidas en cuanto a señalar los hechos e infracciones imputadas, procedimiento a seguir e indicación de plazos, para ejercer su de defensa, como lo hizo en la sede correspondiente, bajo la normativa que rige la materia, sin avizorarse afectación alguna al debido proceso ni al principio de legalidad.

Duodécimo: Que, en relación a las alegaciones formuladas por la reclamante, en orden a que se le habría sancionado conforme a un sistema de responsabilidad objetiva, cabe señalar, que ello no es efectivo, pues como se desprende de los razonamientos de las resoluciones cuestionadas, en la especie tuvo aplicación el estatuto infraccional propio del ámbito administrativo, en el que la responsabilidad se produce por la contravención a una o más normas, sin que sea necesario acreditar culpa o dolo del sujeto infractor, circunstancia esta última propia del sistema de responsabilidad subjetivo o punitivo, en que la intención del sujeto es lo relevante para configurar la posible sanción.

Por último, cabe destacar que el actuar reprochado a la reclamante está dado por la infracción a una serie de obligaciones y deberes que el ordenamiento jurídico le impone observar, en razón de la naturaleza de la



función y actividad como Administradora de Fondos de Pensiones, como la de informar, de custodiar y resguardar los intereses de fondos de terceros y evitar situaciones de riesgo; aspectos que atendida la calidad de agente especializado no ha podido desconocer.

Esta Corte coincide, además, en que los hechos que invoca la reclamante no logran desvirtuar la carga probatoria en cuanto a la justificación de los incumplimientos que la propia Administradora ha reconocido, pero les asigna menor entidad. Al respecto, cabe considerar que si bien la responsabilidad que se le asigna no es de naturaleza objetiva, esta se presume cuando se trata de la vulneración del deber de cuidado que la entidad fiscalizada debe observar en la gestión de intereses generales. En efecto, se trata de una conducta -en un ámbito especialmente regulado- que el ente sujeto a control debe observar, lo que le impone un especial estándar de diligencia, cuya objetivación en cada caso debía demostrar. De modo que la infracción se configura por la inobservancia o falta de concurrencia de las circunstancias fácticas descritas en la norma, siendo labor del infractor el acreditar la concurrencia de causas de justificación que permitan desvirtuar la presunción de responsabilidad por culpa infraccional; lo que, en este caso, se descartó.

Desde esta perspectiva la necesidad de perjuicio o daño se satisface con la puesta en riesgo de los valores y principios envueltos en la actividad que realiza la reclamante, de naturaleza de servicio o función pública, por su vinculación con el derecho a la previsión social que presenta y con el incumplimiento de obligaciones que dicen relación con estos ámbitos, en que la veracidad de la información que se debe proporcionar es trascendental, así como el cumplimiento de las diversas instrucciones dadas por la autoridad sectorial, atendida la supervigilancia a la que se encuentran sujetas las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Por otro lado, cabe señalar que la Resolución que ha sancionado a la reclamante, efectúa un análisis detallado de cada uno de los descargos presentados por la Administradora de Fondos reclamante y de la responsabilidad que le correspondió en estos, considerando los elementos de prueba allegados al procedimiento administrativo.



Décimo tercero: Que, en lo que toca a las alegaciones por haberse dispuesto la acumulación de las diferentes infracciones acusadas, la Superintendencia Previsional, al hacerse cargo de los descargos, sostuvo que no se aplicó el artículo 33 de la Ley 19.980, pues no se trata de una acumulación de procedimientos administrativos, sino que de un único procedimiento sancionatorio en el cual se formularon 8 cargos que se encuentran vinculados entre sí, pues dicen relación con materias de carácter financiero y la obligación de la AFP de cumplir con las medidas de control, respetar prohibiciones, procedimientos y deberes de información establecidos en el D.L. 3.500, de 1980, y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Al respecto, cabe señalar que el instituto de la acumulación es una facultad de la Administración que ejerce privativamente y por razones de economía procesal. En efecto, el artículo 33° del mencionado cuerpo legal dispone: “ *El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros más antiguos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, o su desacumulación*”. Se trata pues de una medida de ordenamiento procedimental que supone la concurrencia de elementos de identidad o vinculación estrecha que la justifiquen, las que en el caso concreto conforme lo indicó la reclamada se cumplan, atendida la relación existente entre los cargos.

Décimo cuarto: Que, en lo que concierne a la infracción del principio de proporcionalidad que denuncia la reclamante, debe consignarse que la Resolución reclamada toma en consideración las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Resolución Exenta N°722, de 28 de marzo de 2022, para la determinación de las sanciones aplicadas a las infracciones constatadas, tales como su gravedad o entidad de los incumplimientos, el beneficio económico obtenido, el daño o riesgo al funcionamiento del sistema de pensiones, la participación de la infractora, las sanciones previas aplicadas, su capacidad económica, la reparación y colaboración en su caso y las sanciones aplicadas por el Superintendente antes o durante la investigación que determinó la infracción. De manera que no resulta



efectiva la acusación que en este sentido se esgrime por la recurrente, la que más bien parece no estar de acuerdo con la ponderación y mérito que la autoridad del ramo efectúa de las circunstancias que contempla la aludida normativa.

Por lo demás, el monto de las multas por las conductas o actos sancionados, aparece dentro de los márgenes previstos por la ley, resultando procedentes a la calificación y graduación de entidad y demás elementos mencionados.

Décimo quinto: Que por lo expuesto, no se observa en la especie ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar de la Superintendencia reclamada, pues, como se indicó en los motivos precedentes, la sanción de multas aplicadas a la reclamante y el *quantum* de las mismas, respecto de cada uno de los cargos formulados, fue adoptada por autoridad competente, la que se sujetó para ello a las normas legales y reglamentarias ya referidas; y todo en el marco de un debido proceso administrativo.

Décimo sexto: Que, descartada la ilegalidad, del análisis de la discusión fáctica sostenida por las partes, en caso alguno podría estimarse que el actuar de la reclamada sea de carácter arbitrario, por cuanto efectivamente ésta se sustenta en la debida y oportuna tramitación de un procedimiento, en el cual la reclamante ejerció los medios de impugnación que motivaron mantener las multas impuestas. Asimismo, los actos dictados en el proceso administrativo seguido ante la reclamada se encuentran debidamente fundamentados.

Por todas estas consideraciones y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 del DFL N° 101, del Ministerio del Trabajo **se rechaza la reclamación** presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A., en contra de las Resoluciones exentas N°s 223 de 4 de diciembre de 2023 y 44 de 17 de enero de 2024, de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Contencioso Administrativo 179-2024.

Redactado por la ministra Carolina Brengi Zunino, quien no firma por estar haciendo uso de feriado legal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU

Pronunciada por la **Tercera Sala de esta Il. Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a seis de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXWXXPCXERU